

Estado y élites empresariales. Argentina y Brasil: 1920-1955

Anibal Pablo Jauregui *

Muchas veces se ha sostenido que en las sociedades capitalistas, los empresarios no dependen de la acción organizada, ya que la influencia que ejercen opera por vías económicas y en forma individual. Como los gobiernos necesitan que el proceso acumulativo prosiga sin problemas, los empresarios disponen de control indirecto de los asuntos públicos por medio de su acción privada.

A este punto de vista se le opone otro, que considera que las posibilidades que tienen los empresarios de que su disposición real o declarada a invertir funcione como un instrumento de presión política, pueden ser bastante limitadas, ya que el veto privado tendrá efecto sólo si el estado careciera de importancia en el proceso de acumulación y distribución del capital.¹ El proceso de acumulación surgiría de una acción mancomunada del estado y los empresarios agrupados para asegurar las condiciones de la reproducción social.

Esta última posición es la que estamos adoptando aquí. La necesidad de influir sobre las decisiones del estado es, entonces, desde nuestro punto de vista parte de las funciones de propias de la empresa moderna y normalmente esto remite a la acción colectiva. Ahora bien, la actuación colectiva está determinada por una cantidad significativa de variables, a saber el grado de organización de los empresarios y de la relevancia social que hayan adquirido, particularmente con relación al sector agrario. Pero también influye de forma decisiva la capacidad de convencer al resto de la sociedad de que sus intereses pueden confluir con los de todos.

* Profesor de Historia Económica Argentina – Facultad de Ciencias Económicas – UBA.
1. Birle P., 1997, p. 32.

Política y élites empresariales en la Argentina agroexportadora

Desde el trabajo de Cornblit (1969), la acción del empresariado fue correlacionada con la masiva condición inmigratoria que detentaba. Según esta interpretación, los inmigrantes eran políticamente “débiles”, aunque triunfaran en el mercado capitalista. La no correspondencia entre política y economía sólo hacía retrasar las posibilidades de incidir sobre el estado a favor de una política que contuviera más eficazmente los intereses urbanos.

Sin embargo, no faltaba entre los industriales una vocación asociativa. ésta estuvo concentrada en la Unión Industrial Argentina (fundada en 1887). Presidentes de la UIA, para citar al sector que nos interesa directamente, como Antonio Baiene y Francisco Seguí, ocuparon bancas de diputados. El *lobby* parlamentario era una herramienta común para lograr protección tarifaria para los productos industriales nacionales.

La crisis de la Primera Guerra Mundial acompañada por un fuerte movimiento huelguístico provocó una creciente angustia del *establishment*. Además, los cambios esbozados en el ámbito gubernamental por la Unión Cívica Radical en la política social y en la atención a los problemas obreros y sindicales agregaban una cuota para incrementar la sensación de inseguridad de las elites económicas. Como respuesta se creó la Confederación Argentina del Comercio, la Industria y la Producción (CACIP) destinada a ser un espacio de estudio, de encuentro de diversas demandas patronales, desde donde levantar propuestas a los gobernantes ajustadas a los intereses de los diversos actores de la economía. Una cierta regulación económica que el estado había comenzado a desarrollar, también actuaba a favor de la agremiación. La nueva institucionalidad política dejaba a las elites empresariales descolocadas en la puja por la ocupación de cargos públicos. La Confederación buscaba ser el puente para que las clases propietarias recuperaran el espacio perdido en el ámbito estatal,² a través de demandas que cuestionaban de modo genérico las políticas públicas no favorables a ella. Es notable en este sentido, la ausencia de reivindicaciones “gremiales” en sus comunicados.

Por su parte la Unión Industrial Argentina mantuvo en esta etapa una posición algo marginal, conectada con los cambios organizativos internos que habían reforzado el papel de las ramas menos concentradas de la industria en la Junta Directiva. Las manifestaciones públicas de la central industrial se encontraban dentro de una línea reivindicativa y gremial sin mayores definiciones globales.

Teniendo en cuenta las dificultades por las que atravesaba la economía argentina al final de la guerra y el deseo de armonizar los intereses de las clases acomodadas con las políticas propiciadas por el gobierno radical, la CACIP convocó en 1919 a la Primera Conferencia Económica Nacional con la intención de generar un foro de debates entre los distintos estamentos de las clases propietarias sobre la agenda pública y social que debía ser encarada por estos sectores de allí en ade-

2. Jáuregui, 2000, p. 10.

lante con el nuevo escenario mundial y nacional. Estas conferencias se repitieron en 1922, 1928 y 1931.

Mientras la UIA pasaba a tener a comienzos de los '20 una presencia más notoria en la vida pública, a la que contribuyó el cambio de estatuto societario en 1922, que otorgaba una mayor participación en las ramas más concentradas de la actividad industrial. Más adelante asumía la conducción de la asociación Luis Colombo, un empresario rosarino vinculado al grupo Leng Roberts, quien se convertiría con los años en un experto conductor corporativo y avezado negociador político.

El golpe militar del 6 de septiembre de 1930 fue recibido con alborozo por las asociaciones de clase de los sectores propietarios, aunque su identificación ideológica con los golpistas no debería absolutizarse, ya que su alineamiento se connotaba de una alta dosis de pragmatismo. No obstante su aspiración restauradora y su nostalgia por la Argentina de los Notables, la Revolución del '30 no podía ser simplemente la recuperación de una dominación oligárquica porque la experiencia democrática había marcado profundamente a la sociedad y, también, porque el proceso de modernización económica y de diversificación social había modificado las bases materiales de esa dominación. Además en esta restauración existía un elemento que había estado ajeno al modelo político añorado: el Ejército. También aparecían como factores de poder los empresarios urbanos, que en 1912 eran todavía una minoría irrelevante, impulsados a ese lugar por la magnitud del desarrollo industrial de los años '20. Esto muestra que el escenario político en que se desenvolvería la Gran Depresión estaba marcado por nuevos y viejos actores que competían en un marco de anormalidad constitucional.

Proteccionismo en la década de 1930

Como se ha visto, el empresariado, como el resto de las clases propietarias, aprobó la deposición del gobierno constitucional de Yrigoyen. Más aún, Colombo se encontraría en la Casa de Gobierno en los momentos culminantes y sería quien solicitara al Vicepresidente Martínez que renunciara a su cargo e inclusive se sospecha que él mismo había redactado el documento de renuncia.³ Sin embargo, el informe que el embajador brasileño en Buenos Aires le envía a la cancillería de Itamaraty en Río de Janeiro afirmaba que la presencia de Colombo en la Casa Rosada se explicaba por la relación que lo unía a Martínez y el pedido de renuncia, por lo insostenible de la situación.⁴ Esto muestra a Colombo tanto como un operador en el campo del oficialismo, como en el de la oposición golpista. Si por un lado impulsaba a Colombo la desconfianza en el sistema de partidos y en el sistema institucional vigente, por el otro también actuaba la búsqueda oportunista de establecerse en las cercanías de un nuevo poder.

3. Ciria, 1986, p. 315.

4. Oficio n° 310 del 7/9/1930, pp. 2-3. Volume 207/3/6. Archivo do Palacio Itamaray.

La buena sintonía entre el gobierno de Uriburu y la conducción empresarial fue confirmada por la convocatoria del Gobierno Provisional a la formación de una Comisión Nacional de Fomento Industrial, presidida por Colombo, como un primer esbozo del régimen corporativo que aspiraba a construir. La UIA tuvo en ella dos representantes además de dos industriales nombrados por el Ministerio de Agricultura. Alejandro Bunge ocupó un lugar de mediana importancia en el Ministerio de Hacienda de la intervención santafesina. Con estas decisiones, el Gobierno Provisorio buscaba rodearse favorablemente del apoyo de las entidades de las clases dominantes, incluyendo a los intereses industriales dentro de la "restauración oligárquica". En estos años de consolidación del desarrollo industrial, las relaciones entre los empresarios y las demás clases propietarias ocupaban un aspecto central del problema de la relación entre el estado y los industriales. Había entre ellas un núcleo común de acuerdo, surgido de una identificación en los valores actitudinales, como lo sugería Cúneo entre industriales y terratenientes.⁵ Las necesidades prácticas de posicionarse, por ejemplo, frente a la política arancelaria, impositiva y de política exterior podían aproximar o alejar a las clases propietarias entre sí o en relación con el Estado.

La posición de los industriales estaba debilitada por la fragmentación organizativa. En la década de 1930 existían al menos cuatro organizaciones patronales con representación en el empresariado industrial a escala nacional además de las agremiaciones regionales y locales. Los industriales se repartían en otras entidades asociativas como las ya mencionadas CACIP, la Asociación del Trabajo y la Federación Argentina de Entidades Defensores del Comercio y la Industria. Todas ellas mostraban además de una dispersión notable, una tendencia a conformar entidades que agregaban intereses de diversos sectores de acumulación. Los principales vínculos que ligaban a los empresarios a los funcionarios estatales estaban representados por las numerosas juntas que los gobernantes conservadores promovieron para defender a las producciones más tradicionales, aunque algunas áreas no tradicionales también fueron reguladas por este método.

El impacto de la segunda guerra mundial: la apertura de la crisis de hegemonía (1939-1945)

Según una lectura bastante generalizada, la Segunda Guerra abrió una enorme brecha de incertidumbre sobre la orientación general de la sociedad argentina, el papel de la industria, el rumbo y la composición de las exportaciones, la definición de la política exterior y de los aliados, la participación de la clase obrera en el sistema político y, por supuesto, este mismo sistema político.

El descenso de los recursos fiscales, como resultado directo del conflicto, resultó mucho más sensible por el impacto de los gastos militares sobre el gasto,

5. Cúneo, 1967, pp. 129-131.

que estaba impulsada tanto por necesidades de la Defensa Nacional en momentos de guerra mundial como por la incidencia decisiva de las fuerzas armadas sobre un sistema institucional frágil.

La respuesta gubernamental a la excepcionalidad de la guerra fue el frustrado Plan Pinedo de 1940 que replanteaba la orientación económica del país con una lectura bastante pesimista de las posibilidades de la economía nacional ante un conflicto prolongado. La propuesta del Ministro de Hacienda recibió el apoyo del empresariado industrial en virtud de confirmar la necesidad de adoptar medidas de intervención económica del estado a favor de reorientar la economía, mientras que otras expresiones de las clases dominantes demostrarían menos entusiasmo. La soledad en que se debatió este plan mostraba la ausencia de convicción tanto de las clases propietarias como del estado por adoptar un rumbo definido. El rechazo del Plan en el parlamento no significaría que sus propuestas quedaran totalmente descartadas. Entre otras, se puso en práctica la compra de cosechas invendibles lo que generaría un incremento de los gastos gubernamentales.

Pero aunque el Plan del ministro Pinedo no se aprobó —al poco tiempo renunció a la cartera— se hizo obligatorio hacer frente al incremento de gastos tomando en cuenta la imposibilidad de acceder al crédito internacional. Ya en 1939, bajo la presidencia de Ortíz, se había iniciado una campaña del Poder Ejecutivo por incrementar impuestos con acuerdo parlamentario. Al año siguiente el vicepresidente en ejercicio del Poder Ejecutivo, Ramón Castillo, presentó al Parlamento una serie de medidas que incrementaban la presión fiscal sobre las empresas, con el argumento indiscutible de la baja de los ingresos generados por los impuestos a la importación.

Las asociaciones patronales reaccionaron vívidamente contra estas medidas, argumentando que con la pretensión de disminuir el déficit se ocasionaba una intolerable intromisión en la economía del sector privado. La gran prensa, en especial el diario *La Nación*, se convirtió en portavoz del frente de asociaciones patronales que se unieron bajo la sigla de “Comité de Defensa Económica” que incluía a la Bolsa de Buenos Aires, la UIA, la Sociedad Rural, la CACIP y otras entidades patronales. Una verdadera rebelión de “Fuerzas Vivas” se concretó en una multitudinaria reunión en septiembre de 1942 en la Bolsa de Comercio, a la que concurren —según informó el comité organizador— más de 3.300 personas, convocadas por el Comité. El blanco de los ataques era el alza de impuestos pero junto a esto, aparecía en cuestión la relación de los empresarios y el estado. Los representantes empresarios clamaban por una integración orgánica en la formulación de medidas que los afectaba, en lugar de una triste dependencia de la “imaginación burocrática” que avanzaba rápidamente sobre derechos considerados propios.

No estamos ante la primera protesta patronal por el alza de impuestos. Esta había sido una reacción normal desde la Primera Guerra Mundial. Pero en este caso de 1942 se agregaba otra dimensión: la búsqueda de canales de participación en las decisiones políticas. Los representantes empresariales demandaban la constitución de organismos mixtos formados por técnicos y representantes privados donde discutir el diseño y los alcances de la política estatal. Y al mismo tiem-

po esta rebelión ponía de manifiesto la atención que por entonces lograba el supuestamente marginado movimiento obrero por parte de las autoridades gubernamentales.

Las elecciones presidenciales de 1944 presentaban la oportunidad de recomponer el sistema de relaciones entre clase política y sectores propietarios. En gran medida estos últimos, a través de la UIA y de la CACIP, apoyaron la candidatura del senador Robustiano Patrón Costas –propietario de la compañía azucarera de San Martín del Tabacal– ungido por el dedo de Castillo. Del lado de los industriales el sostén al senador se fundaba en que los representantes políticos de las provincias azucareras habían apoyado medidas de protección a la producción destinada al mercado interno y, al mismo tiempo, guardaban buenas vinculaciones con el sector exportador. La posición favorable de Patrón Costas a los Aliados, y una eventual ruptura con el Eje que significaba en los hechos un acercamiento a los Estados Unidos, no fue mal recibida por los representantes de las clases empresarias que habían abandonado su hostilidad a la Unión. Esto en parte ayuda a explicar por que el golpe fuera recibido silenciosamente. Esto no significa que el empresariado fuera opositor.

Pero la cuestión tributaria continuaba constituyendo un contencioso entre el gobierno militar y las clases dominantes. Si el gobierno civil había aumentado notablemente esos gastos, era improbable que el nuevo gobierno, institucionalmente militar, los redujera. La diferencia evidente de la nueva situación radicaba que a los afectados por la reforma impositiva les faltaban en principio instrumentos institucionales de resistencia: como ha mostrado Prebisch lo que antes resultaba inadmisibles, pasó a ser aceptable frente al autoritarismo reinante.⁶ El gobierno militar, no obstante, quiso mostrarse negociador y para ello solicitó la colaboración empresarial en un consejo asesor integrado por representantes de las corporaciones: la Comisión Honoraria Asesora de Problemas Financieros, cuyas recomendaciones fueron muy parcialmente recogidas por el Ejecutivo.

En verdad, durante el primer año y medio de gobierno militar, éste parecía marchar decididamente a una política de colaboración y acercamiento con las organizaciones representativas de intereses que vendría a reemplazar las funciones naturales de los partidos políticos en los sistemas parlamentarios. A mediados de 1944, la UIA participaba de 38 organismos gubernamentales y para-gubernamentales. Existieron otras muestras de buena disposición gubernamental que dieron resultados concretos y una de ellas, curiosamente, provendría del Departamento de Trabajo. El gobierno de Ramírez, por sugerencia de los industriales modificó la ley 11.317 sobre trabajo de menores, que limitaba la jornada de trabajo de los menores entre 14 y 18 años a seis horas diarias. Por un decreto se extendía la jornada laboral de los menores a 8 horas diarias o 48 semanales.⁷ El decreto fue firmado antes de que Perón fuera nombrado al frente del organismo que regía las relaciones laborales.

6. Prebisch, 1944.

7. *Argentina Fabril*, n° 898, oct. 1943, p. 107.

Las razones de estas coincidencias no parecen difíciles de entender. El gobierno militar de Ramírez, como antes el de Uriburu, buscaba en un corporativismo no institucionalizado el apoyo que le retaceaba su falta de legitimidad constitucional. Esta búsqueda conllevaba una inevitable politización de estas organizaciones que en muchos casos adoptarían una posición mucho más militante que en el pasado en torno a los acontecimientos nacionales.

El empresariado, el peronismo y el cierre de la crisis hegemónica (1945-1950)

El peronismo se encargó de dar una respuesta bastante completa a los desafíos que la Segunda Guerra Mundial había depositado sobre la dirigencia argentina y que hemos descrito al comienzo del párrafo anterior.

En los primeros meses de la gestión de Perón en la Secretaría de Trabajo, las relaciones entre su repartición y el empresariado estuvieron signadas por la mutua consideración. Un vago corporativismo parecía unir a funcionarios laborales militares y empresarios. Sin embargo, pronto se vio que no compartían el mismo tipo de corporativismo. Las diversas medidas favorables a los gremios obreros comenzaban a inquietar a los medios empresariales.

Supuestamente la opción de Perón a favor de las organizaciones colectivas, que quebraran la atomización individualista, debía estimular tanto la sindicalización obrera como la empresaria. La posibilidad de una fuerte agitación social de posguerra debía convencer a los industriales de prestar la colaboración necesaria para esta organización que evitaba el desarrollo de corrientes peligrosas entre los trabajadores. El estado se presentaba como una garantía de que la acción de los sindicatos surgidos de esta iniciativa no conspiraría contra el orden social.⁸ Simétricamente Perón comenzaría aquí un cuestionamiento a las patronales argentinas por una desmedida preocupación la tasa de beneficio, lo que estaba indicando que la profundización de los vínculos directos y simbólicos con la clase obrera implicaba también un distanciamiento respecto a los deseos del sector empresario. Perón propiciaba la reorganización de las asociaciones empresarias a través de una ampliación de su lista de asociados y un desplazamiento de la dirigencia identificada con las élites tradicionales del país. A fines de 1944 Perón, cargó directamente contra la conducción de Colombo y la estructura misma de la UIA, declarándola poco representativa de la totalidad de los industriales, iniciando un juego de pulseadas y conflictos que perduraría por un año y medio.

A esta ofensiva, las entidades patronales respondieron simétricamente, involucrándose abiertamente en la lucha política, en una apuesta de alto riesgo para las asociaciones y para las propias empresas. A medida que la virulencia de la lucha política aumentaba, la UIA como el resto de las organizaciones empresarias se fue

8. Perón, 1944, p. 183.

volcando más intensamente a la oposición al gobierno y en consecuencia fue adoptando un discurso políticamente liberal. El 17 de octubre de 1945 exteriorizó el hecho de que las relaciones laborales ya no eran entonces un problema reducido al interior de la empresa; había pasado a ser un tema central de la vida pública nacional, lo que obligó a la patronal a colocarse de una manera diferente frente a la cuestión.

Implicada en la lucha por el poder, la dirección de la UIA bajo Lamuraglia se inclinaría abiertamente por la Unión Democrática, la única vez en la historia de la institución que se adoptaba semejante posición ante una elección política nacional. Este involucramiento político de la asociación nacional de los industriales fue acompañado por un aporte financiero de 300.000 pesos, que fue utilizado por Perón para acusar a la Unión Democrática de pro-patronal y a la UIA de intromisión en elecciones ajenas a su cometido de representación.

Desde fines de 1945 la campaña electoral para los comicios de febrero marchaba a todo vapor. Los patrones en reacción a la política laboral del gobierno, pero también, como parte de la campaña opositora conformaron un frente y lanzaron un lock-out, que sirvió una vez más para fortalecer la identificación de Perón con los trabajadores.

La crisis interna de la institución se agravó tras el triunfo de Perón en las elecciones de febrero, en las que según las acusaciones del candidato laborista, los industriales habían contribuido con un cheque a la fórmula opositora. Mucho más trascendente que la desviación de fondos institucionales hacia fines políticos, el gremialismo empresario quedaba identificado con el antiperonismo, lo que facilitó muchísimo que los trabajadores se identificaran con el peronismo.

Las acusaciones de Perón a la dirigencia industrial no significaban de ninguna manera que despreciase el apoyo empresarial. Es sabido que la CADE, vinculada al grupo Tornquist, sostuvo financieramente la campaña electoral del candidato laborista y que como consecuencia de este apoyo no fueron difundidas las investigaciones sobre las actividades de la compañía eléctrica llevadas a cabo por la Comisión Rodríguez Conde. También era conocida la presencia de empresarios de nota como el naval Alberto Doderó. A pesar de su corporativismo, Perón prefería tratar individualmente con los empresarios y no crear canales orgánicos de participación.⁹ El distanciamiento entre el empresariado y el gobierno se acentuó tras las elecciones internas de la UIA que terminaron imponiendo una conducción opositora bajo el liderazgo de Pascual Gambino.

La utilización de la influencia estatal en las elecciones a través de la suspensión de los créditos para las empresas que participaran de la lista opositora era un claro anticipo de la significación que tenía el subsidio estatal en la nueva economía.

9. En una declaración Perón sintetizaría esto de la siguiente forma: "No acepto testafierros pagados por organismos patronales. Por eso llamo al patrón de la fábrica y no al gerente de la Unión Industrial". Tomado de Seoane, 1998, p. 56.

Tras la intervención a la UIA, el sector entró en un largo proceso de reorganización que concluyó en 1953 con la fundación de la Confederación General Empresaria y el surgimiento de un nuevo líder empresario, José Ber Gelbard.

¿Cómo explicarnos estas relaciones tan conflictivas entre el peronismo y el sector empresarial? Algunos han considerado que los lineamientos del estado peronista respondían a los intereses históricos de la burguesía que para realizarse en el largo plazo es necesario poner un freno a la ambición acumuladora de la misma en el corto plazo.¹⁰ Pero, si consideramos más detalladamente aspectos políticos e ideológicos se observa una coincidencia entre la dirigencia empresarial y Perón. Por una parte, un vago corporativismo existía en las entidades empresariales desde hacía varias décadas. No era pues el antiliberalismo de Perón lo que podía enfrentarlos. Por otra parte, no fueron los beneficios sociales recibidos por los trabajadores que incrementarían los costos empresarios los únicos motivos del rechazo a la política peronista, aunque, claro está, dicha legislación no era bienvenida. Existía desde antaño cierta diversidad en la valoración de estas medidas y en la manera de encarar las demandas de los trabajadores. Un eje fundamental de los cuestionamientos empresarios al peronismo estaba colocado en que esta legislación era impuesta sin participación alguna de los dirigentes patronales y en el consiguiente refuerzo del poder de los trabajadores en las instituciones estatales y en las propias empresas. Por último, la política corporativa del peronismo –tal vez como fruto mismo de la puja entablada– acabó con cualquier traza de autonomía organizativa para los empresarios, limitando aún más las posibilidades de incidencia colectiva sobre el rumbo encarado.

A pesar de la situación acéfala en que se encontraba la conducción gremial empresaria, las cámaras empresariales funcionaban, e incluso participaban en la asignación de los recursos crediticios, claves en la política económica y determinante del nivel de rentabilidad de la empresa. El uso del crédito pasó a tener un interés primordial para las empresas privadas. El acceso al crédito podía provenir del *lobby* individual o bien ser obtenida por medios corporativos. Estos hechos confirman la idea de que Perón nunca llegó a desarrollar las instituciones típicas de un estado corporativo.¹¹ Pero esto no significa que las tendencias corporativistas no tuvieran un lugar en el régimen peronista.

Con este modelo de relación entre estado y asociaciones de clase se cerraba, al menos era la intención, la crisis de hegemonía que había abierto la Segunda Guerra, por medio de la unificación del estado y la sociedad, que garantiza la armonía social. En este modelo el estado se erigía en el tutor de la Nación y en él las clases propietarias que tenían un papel asegurado pero subordinado.

10. Sidicaro, 1999.

11. Alberti, Golbert y Acuña 1984, p. 101.

Productividad: la oportunidad de recuperar la iniciativa (1950-1955)

Frente a la crisis económica del período 1948-1952 el gobierno peronista giró en su política económica para recortar el gasto público y aumentar la producción agraria, expandir las exportaciones y contener aún más las importaciones. Las dificultades económicas por las que pasaba el país desde 1949 inducían a rectificar la política económica para inducir un aumento de la eficiencia, reduciendo el gasto, sin abdicar del pleno empleo ni de mantener en lo posible el valor del salario, lo cual era francamente difícil sino se corregían aspectos esenciales de la dirección política estatal. Esta reorientación, como ya hemos señalado, fue impulsada por un nuevo equipo económico, pero demandó en verdad varios años de tribulaciones. Finalmente, en 1952 la nueva orientación de la política económica se plasmó en el Segundo Plan Quinquenal que, fuera de un detallado programa de objetivos de crecimiento, estuvo acompañado de un típico programa de estabilización que propiciaba la austeridad, el ahorro y la productividad. Esta última se convirtió en la prioridad de la agenda de política económica a partir de 1952 y, ya de por sí, constituía un triunfo del empresariado que se venía quejando desde 1945 (aunque este argumento fuera utilizado anteriormente) por la baja del rendimiento laboral como consecuencia de la promulgación de las leyes favorables a los empleados.

También hemos visto las diferentes entidades gremiales empresarias que se disputaban la herencia de la intervenida UIA. Entre ellas la Confederación Empresaria Argentina (CEA), que contaba con apoyo en Buenos Aires y la Confederación Argentina de la Producción, la Industria y el Comercio (CAPIC), que se hacía fuerte en las provincias del interior. Ambas entidades se encontraban en lucha. De hecho, Perón dejó hacer sin intervenir abiertamente. Las dificultades del empresariado para su acción colectiva se hallaban en la carencia de una organización autónoma que lo expresara. Como vimos, esto no era un resultado indeseado por el régimen.

La reorganización de las asociaciones patronales formalmente concebida por Perón en 1945, recién se cristalizó en 1953, con la formación de la Confederación General Económica, bajo la conducción de un poco conocido comerciante radicado entonces en Catamarca, José B. Gelbard. Su discurso combinaba las necesidades empresarias con el reconocimiento de los derechos sociales y laborales. La creación de la CGE tenía para el régimen la ventaja de contar con un canal de comunicación con el empresariado y de servir de contrapeso a la Confederación General del Trabajo. La formación de esta central de los empresarios era parte de la modificación de la política económica y de la resignificación del papel del empresario que esa modificación generaba. Al mismo tiempo aparecieron en la agenda pública otros temas como el de la productividad que venía siendo impulsado por los empresarios desde la irrupción del peronismo en 1945 y se encontraba habitualmente en las declaraciones y documentos de las distintas expresiones del empresariado.

El gobierno comenzó a considerar que este problema debía concitar un interés directo por parte de los actores económicos, aunque esta tarea debía hacerse bajo su supervisión. Por esta razón comenzaría a pensarse en una asamblea de patronos y obreros que intentara consensuar medidas para aumentar el rendimiento laboral, afectado en gran parte por las modificaciones que el propio peronismo había aparejado.

En 1954 se reunía, buscando lo que más adelante se llamaría un Pacto Social, el Primer Congreso de Organización y Relaciones del Trabajo, que enfrentaba por primera vez a los representantes de empresarios y obreros frente a la obligación de definir los parámetros, los métodos de producción más racionales. Estos escarceos produjeron bastante expectativa en los círculos de negocios expresados a través de algún órgano de prensa ya que esto permitiría elevar el nivel técnico de la economía.¹² Más tarde, en marzo de 1955 en los salones del Congreso Nacional se juntaban los delegados del Congreso de la Productividad en deliberaciones que no llegarían a resultados decisivos, aunque la CGE consiguió que los empresarios pudieran tener más libertad para manejar a su personal de acuerdo a criterios de eficiencia y para otorgarle mayor importancia a la productividad en las negociaciones laborales.

Indudablemente, las patronales no actuaron ni incidieron directamente en el estallido de la Revolución Libertadora, aunque todo lleva a suponer que, en su mayoría, la apoyaron. Con su triunfo se abrió un nuevo tiempo en los que su capacidad para influir sobre el estado pasó a ser mucho mayor de la que se tuvo en el peronismo. Sin embargo, la experiencia peronista fracturó por largas décadas al empresariado en dos organizaciones de base, la Confederación General Empresaria y la Unión Industrial Argentina, cuyas siglas tenían inequívocas reminiscencias políticas. La fractura política y organizativa impidió al empresariado configurarse como un actor unificado.

Los empresarios en la república "oligárquica" brasileña (1889-1930)

El desarrollo industrial brasileño en el período estudiado que se cuenta en los más altos de Latinoamérica, hasta concluir en el milagro de los años '70, no fue sólo el resultado automático del choque externo ni de la decisión del estado aunque cierto es que el crecimiento industrial guiado por las exportaciones pasó al crecimiento industrial guiado por el estado. Tanto en uno como en otro período la participación y la presencia de los industriales para hacer valer sus intereses en la política pública tuvo una influencia significativa en la defensa de sus intereses.

Durante la época imperial la vinculación entre clases propietarias, entre ellas los manufactureros, y el estado fue realizada a través de la *Sociedade Auxiliado-*

12. *Camoatí*, n° 176, p. 1.

ra da Indústria Nacional cuya función era asesorar al emperador en los problemas de la producción y canalizar demandas sectoriales. En la época republicana esta entidad se transformó en Centro Industrial del Brasil, constituyéndose en portavoz de los intereses industriales cariocas y fluminenses. La corriente industrialista tenía sus apoyos más firmes en la capital. En San Pablo, aunque también integraba el área industrializada del país, pesaba sobremanera la intención de protección al café, considerada la llave de su progreso económico.

La Primera Guerra iría a transformar de cuajo este panorama. Los paulistas entraron a participar más activamente del debate sobre la política económica, participación nacida de su propio y espectacular desarrollo industrial. A ello además contribuiría la acentuación del conflicto social que precisamente se haría particularmente agudo en la capital del estado.

En la década de 1920, los canales de comunicación entre el sector empresarial y el poder político se engrosaron con la creación de las primeras instituciones modernas de intervención estatal en el terreno económico y social con participación corporativa: el Consejo Nacional del Trabajo y el Consejo Superior de Industria y Comercio. No obstante el carácter nacional de sus problemas, estos consejos contaron con un amplio predominio de la representación de las entidades asociativas cariocas. En gran medida la reacción a favor de la agremiación por parte de las entidades de clase de los otros estados de la Federación con intereses en la industria: San Pablo, Minas Gerais, Río Grande y en menor medida Pernambuco, estaba destinada a fortalecer la presencia de estas regiones en la formulación de la política económica. Este corporativismo social de base regional surgido durante la década de 1920 se configuró en una creación original de los empresarios para su proyección en la esfera política.

La situación política y social se complejizó en los años '20 a causa de la agitación atestiguada en huelgas y en la movilización de las clases populares urbanas. Utilizando los canales de negociación, las distintas asociaciones empresarias obtenían beneficios por parte de los gobernantes. Tal fue el caso de San Pablo donde el presidente Julio Prestes (1927-1930) intercedió a favor de la industria en su lucha por obtener más altas tarifas y por contener la legislación laboral. Aunque no tenían un alineamiento orgánico, las más importantes asociaciones del empresariado paulista guardaba vínculos privilegiados con el oficialista Partido Republicano Paulista, si bien existían relaciones con el opositor Partido Democrático. En suma, la presencia de industriales en el PD y en el PRP estaba indicando el fuerte compromiso del empresariado con la vida política, sin embargo el vínculo entre partido y clase no era en forma alguna directo ni absoluta.

En Río de Janeiro, no se reproducía exactamente esta situación. El Centro Industrial de Brasil tenía muchos más vínculos con el Centro Republicano Carioca (oficialista a nivel nacional) que con el Partido Democrático, un partido más popular y jacobino que su par paulista. Por lo común, los industriales cariocas y paulistas solían alinearse con el gobierno federal, lo que les permitió ganar protección para la industria. Los límites de la acción política de cada uno de los sectores em-

presariales estaban determinados por la necesidad de respetar la alianza que tenían con las restantes asociaciones de clase de comerciantes y de agricultores.

Los empresarios y la crisis de 1929

Ante los problemas políticos y económicos que se vislumbraban en 1929, los industriales, especialmente de Río de Janeiro y de San Pablo, se dispusieron a actuar decididamente, en principio operando sobre el gobierno nacional a través de Centro Industrial de Brasil¹³ y de la Federación de las Industrias del estado de San Pablo. Como se sabe, las elecciones presidenciales de 1930 abrieron una brecha en la coalición gobernante. El Partido Republicano Paulista del presidente Washington Luís Pereira de Souza decidió desconocer el acuerdo con Minas Gerais, que suponía la alternancia de un presidente paulista y otro minero (acuerdo *café com leite*), y promovió la candidatura del perrepista Julio Prestes a la Presidencia de la República. Esto hizo que Minas Gerais buscara el acuerdo con Río Grande del Sur y junto con Paraíba formaran la Alianza Liberal, cuya fórmula era Vargas – João Pessoa. En la plataforma que se aprueba para ésta, se observan puntos que en nada agradaban a los industriales: por una parte el rechazo al proteccionismo que perjudicaba a los consumidores y por la otra el reconocimiento de la necesidad de poner en ejecución medidas que beneficiaran a los trabajadores.¹⁴

Las fuerzas sociales que apoyaban al gobierno de Vargas en su primera etapa parecían provenir principalmente de los núcleos oligárquicos de cada estado aunque también incluía a las capas urbanas, entre las cuales los industriales tenían una evidente preeminencia. Cuando Vargas finalmente se alzó con el poder después de un mes de incertidumbre en noviembre de 1930, los industriales de Río de Janeiro y de San Pablo le hicieron saber a los nuevos gobernantes que contaban con su apoyo. Algunos de ellos fueron nombrados para ejercer funciones políticas: Jorge Street fue director de Industria del Ministerio de Trabajo mientras que otro industrial, Manuel Guilherme Silveira era presidente del Banco Do Brasil. Las asociaciones aprobaban la creación de los nuevos Ministerios, de Educación y Salud Pública y el de Trabajo, Industria y Comercio y esperaban que el nuevo gobierno tomara algunas medida que eran asignaturas pendientes del caído: la nacionalización del intercambio comercial a través de la eliminación de los impuestos interestaduales y el establecimiento de consejos que permitieran que los empresarios pudieran tener voz y voto.¹⁵

13. En el CIB Mario de Andrade Ramos destacando el peso de su asociación, cuestionaba el peso de la tributación que sufría el sector industrial, la desorganización del sector financiero y los costos creados por la legislación social. Para los industriales más seriamente afectados por la crisis textiles, calzados, en Río de Janeiro. Andrade Ramos sostenía la importancia de la racionalización.

14. Fausto, 1994, pp. 44–45.

15. Centro Industrial do Brasil, 1931, pp. 338–341.

Alianza y conflicto con el estado varguista (1930-1946)

El *Gobierno Provisorio* se instaló en noviembre de 1930 en el punto culminante de la crisis. La necesidad obligaba a gobierno federal, a las elites estaduais y a las fuerzas económicas a encontrar fórmulas de entendimiento para resolver la crisis productiva y el desempleo. Los contactos entre el estado y las asociaciones de clase que los representaban fueron perturbados por las complejas y altamente conflictivas vinculaciones entre el gobierno federal y las elites estaduais como un todo, al compás de los debates entre federalismo y regionalismo.

Los industriales consiguieron el amparo del estado ante la recesión que afectaba a la industria textil merced a la presión de las poderosas asociaciones textiles de San Pablo y Río de Janeiro. Ésta se tradujo en un decreto de marzo de 1931 que restringía la importación de maquinarias en industrias consideradas en estado de superproducción.¹⁶ Otra medida importante impulsada por los industriales de los centros fabriles nacionales fue la eliminación de los impuestos interestaduais e intermunicipales, consagrada por el decreto 19.995 de mayo de 1931, aunque esta disposición no siempre fue respetada por los interventores nombrados por Vargas que, como muestra de la fuerza del regionalismo, los restablecieron como fuente de ingresos.¹⁷

Cuando la crisis fue disminuyendo de intensidad y se restablecieron en parte los equilibrios externos y con ellos la disminución de los precios relativos de las importaciones, la acción de los industriales consiguió elevar de una forma notable el nivel de protección que tenía la industria, iniciando una clara afirmación de la estrategia sustitutiva de importaciones, aunque sin excluir las exportaciones. La discusión de la reforma tarifaria de 1934 agudizó el enfrentamiento entre los líderes industriales y los defensores del librecambio. Algunos que se oponían a la elevación generalizada de la protección a la industria, proponían que los aranceles y la protección sólo afectaran a las industrias "nacionales", esto es que usaran materia prima local.¹⁸ En contrapartida, los industriales esperaban de la tarifa de 1934 una protección frente a la competencia externa y habían iniciado en 1933 bajo la conducción de sus asociaciones una ofensiva contra las importaciones, solicitando una efectiva legislación anti-dumping, leyes *drawback* y la conformación de una Comisión de Similares.¹⁹

Finalmente, la tarifa arancelaria de 1934 consiguió una alta protección para algunas ramas de la industria. De esta forma, el cemento fabricado localmente logró sustituir una porción muy grande las importaciones. Otros rubros que amplían considerablemente sus niveles de protección fueron los neumáticos, la harina y los tejidos. El intento proteccionista quedaba traslucido en que el producto final

16. Stein, 1979, p. 145.

17. Carone, 1978, p. 121.

18. Leopoldi, 1984, p. 96.

19. Leopoldi, 1984, pp. 108-110.

pagaba un derecho arancelario muy superior al de la materia prima que contribuía a su elaboración.

A pesar de que las leyes que interesaban al empresariado eran nacionales, su acción era regional quedando inevitablemente subordinada al conflicto dominante en la Segunda República entre regionalismo y centralismo. El ropaje regional de la actuación industrial le permitía contar con la fuerza de todas las elites estatales y se manifestaba en el ámbito asociativo en un corporativismo de base regional. San Pablo fue el estado en el que el regionalismo tuvo su expresión más aguda por reacción al centralismo varguista. Pero por otra parte, este regionalismo alimentó por su parte un alto nivel de colaboración entre poder político y asociaciones gremiales.

La Constitución de 1934 le otorgaba a las entidades gremiales de empleados y empleadores de acuerdo al número de afiliados representación corporativa en el parlamento nacional, una modalidad que ya se había aplicado en la asamblea constituyente. La designación de los representantes *classistas* corría por cuenta del presidente de la República que esperaba que le permitiese contar con una base de apoyo independiente de los partidos regionales. Sin embargo, en la práctica los diputados clasistas terminaron por incorporarse a las bancadas de los estados a los que pertenecían.

Esta experiencia se convirtió en un aprendizaje para la participación política posterior. Por su intermedio, el empresariado pudo hacerse presente en el debate sobre el Tratado de Comercio Brasil - Estados Unidos de 1935, oportunidad en que pugnaron con fuerza para evitar concesiones a la importación de productos industriales de consumo.

En esta etapa parecería presentarse dos estrategias de acción pública para los empresarios. Por un lado, una porción empresarial asentada firmemente en la Capital de la República apostaría a favor de la actuación política por medio de un partido. Este fue el Partido Economista -sus principales dirigentes fueron Oliveira Passos, presidente de la *Federação das Industrias de Río de Janeiro* y el mencionado Valandro, jefe de los comerciantes- cuyo objetivo era crear un instrumento de acción política de la burguesía en el nivel nacional. Este partido que se gestó entre 1931 y 1934 se asoció a la experiencia constitucional de la Segunda República uniendo su vida a ésta, expresando una generación de dirigentes empresariales identificados con el liberalismo.²⁰ Los resultados electorales del Partido fueron regulares y su existencia fue perdiendo sentido en cuanto se debilitaba el andamiaje institucional de la Segunda República.

De esta forma fue fortaleciéndose la alternativa corporativista. Ésta fue principalmente estimulada desde San Pablo, en especial por la dupla Lodi-Simonsen, que adoptó una estrategia de acción colectiva basada en la participación en los órganos técnicos creados desde el Poder Ejecutivo o desde los poderes estatales para hacer valer en esas esferas la capacidad y la autonomía de las asociaciones

20. Leopoldi, 1984. p. 396. Véase también Gomes, 1979, cap. 7.

de clase. Esta estrategia intentaba construir la identidad de clase a través de las asociaciones corporativas, debidamente fortalecidas en un proceso de interacción con las políticas gubernamentales.

En este período que fue de 1934 a 1937, esta línea –finalmente exitosa– se hacía presente en el Consejo Federal de Comercio Exterior. Allí se comenzaría a delinear un proyecto de desarrollo industrial propuesto por Simonsen, que incorporaba como parte fundamental la necesidad de incrementar la capacidad de consumo del mercado interno a través del incremento de la renta nacional y por ende de los ingresos de los asalariados. Si todavía, reconocía en la aduana una herramienta clave de política económica, apuntaba también a la elasticidad en la oferta de dinero, la producción nacional de materias primas y el desarrollo de nueva tecnología. A su vez, teniendo en cuenta la continuidad de los problemas del sector externo, debían ser establecidas prioridades para la importación de máquinas además de mejorar los transportes el correo, y de crear un banco industrial para el financiamiento a largo plazo.²¹

La profundización del proceso de industrialización pasaba a ser una cuestión de primer orden para San Pablo, que vislumbraba allí una fuente de liderazgo nacional y una forma de resistencia ante los intentos centralizadores provenientes de la capital. Paradójicamente, el regionalismo contribuyó a erigir una fuerte posición dinámica a escala nacional favoreciendo en mucho la actuación de la Federación Industrial del Estado de San Pablo en función de la consecución de sus metas.

La dinámica y la acción del empresariado estaban sometidas a situación dominada por la incertidumbre. El ciclo de inestabilidad política tuvo un punto crítico en la Intentona Comunista de 1935, una aventurada tentativa de la izquierda de hacerse de una fuerte base en las fuerzas armadas, que se convirtió en la justificación para la progresiva adopción de medidas de emergencia, de suspensión de garantías constitucionales.

En un contexto internacional crecientemente recorrido por las tensiones belicistas y autoritarias y en momentos en que otra crisis económica afectaba a las exportaciones, Vargas con el apoyo oficial de la cúpula militar llevó a la dictadura del *Estado Novo* por medio del golpe del 7 de noviembre de 1937. La recepción del cambio fue bastante positiva en las elites políticas y económicas, teniendo en cuenta el clima preparado por las crisis recurrente de la coalición gubernamental precedente y la apelada amenazada del peligro comunista. Predominaba entre los líderes industriales paulistas, vinculados al Partido Republicano Paulista, una posición de colaboración, más o menos crítica con el *Estado Novo*.

El hecho de que el nuevo régimen político iniciaba una nueva etapa en la relación entre el estado y el empresariado industrial ha sido un punto aceptado por la historiografía.²² A diferencia de lo que había ocurrido en 1930, las asociaciones de clase del empresariado acompañaron mayoritariamente el *coup de main* del Che-

21. Dean, 1971, p. 216.

22. Carone 1977, p. 69.

fe da Nação, cuya dictadura veían mejor preparada, que una frágil institucionalidad liberal, para hacer frente a la renacida crisis económica y a los desequilibrios socio-políticos del país. El *Estado Novo* contuvo, como remarcará Aspasia Camargo, la enorme paradoja de ser concebido en gran medida para domesticar a las elites estaduais y de contar con el concurso de esas propias elites.²³ Sin embargo, no faltaban recelos entre los hombres de negocios que encontraron beneficios en la represión a la izquierda y al movimiento obrero pero que sentían amenazados por el garrote de Leviatán. Un industrial paulista ya citado contaba que para proveerse de lana hizo una gestión con el ministro de Hacienda Souza Costa que le sugirió que le comprara a un productor amigo de Vargas, cuya lana era de mala calidad. Sólo después de haber hecho esta compra accedió a un permiso para importar lana.²⁴

Con todo, la industria fue considerada en las decisiones del gobierno. La propuesta de Roberto Simonsen de 1936 de restringir las importaciones para hacer frente a la crisis externa fue de hecho adoptado por el gobierno en abril de 1938 cuando Vargas constatará la continua declinación del precio de las exportaciones y la persistencia en el nivel de precio de las importaciones.

Las asociaciones industriales acentuaron su perfil sectorial especialmente visible en la actuación de los líderes empresarios en los distintos consejos y órganos que fueron creados para estudiar medidas de política económica, especialmente en el *Conselho Federal de Comércio Exterior* y en el *Conselho de Expansão Económica do Estado de São Paulo*. De esta forma, el empresario se integraba al modelo de modernización autoritaria promovida por Vargas y los militares que apoyaron la instauración de la dictadura estadonovista.

De ninguna forma se puede deducir de esto que hubiera armonía entre funcionarios públicos y empresarios: los conflictos entre las elites económicas y el estado estarían a la orden del día en el período 1939-1942. Es bastante notable el hecho de que el núcleo principal del conflicto entre estado federal y clases propietarias estaba limitado a San Pablo. El presidente de la Confederación Industrial de Brasil, Lodi en carta de Souza Costa prácticamente restringía a este estado el problema que se presentaba con la arbitrariedad de los fiscales, la excesiva presión impositiva y las interpretaciones caprichosas de los textos legales.²⁵ La fuerza que impulsaba a los reclamos provenientes de San Pablo se gestaba en un poder privado estructurado en instituciones autónomas, agresivas con alto grado de interacción y capaces de adaptarse a las variaciones de la vida política y de las instituciones estatales.²⁶

Aunque la guerra mundial activaba ciertos conflictos entre sectores de las clases propietarias, limitó las posibilidades de los trabajadores tanto en el terreno or-

23. Camargo Aspasia et al, 1989, p. 11.

24. Gasparian, 1973, pp. 32-35.

25. Arquivo Souza Costa. FGV/CPDOC. SC., 33.08.15.

26. Costa 1989, p. 6.

ganizativo como en el de la acción directa. En el balance el conflicto bélico mundial intervino a favor de la consolidación de la colaboración entre las clases dominantes y el Estado, que se tradujo en un creciente apoyo de los industriales hacia la Dictadura. Dentro de los organismos técnicos creados en la emergencia para responder a la excepcionalidad se encontraba la *Coordenação de Mobilização Econômica* permitió una más estrecha colaboración entre elites económicas y políticas.

El bloque de las elites paulistas aprobaba las medidas tomadas por el gobierno federal para hacer frente a la guerra, especialmente el apoyo estatal a la exportación de café. Los principales líderes empresariales, superados los conflictos provocados por la política social y sindical del gobierno, en el que los empresarios obtuvieron reconocimiento a sus demandas, abandonaron hacia 1942 antiguos recelos hacia el gobierno federal. Simonsen pasó a ser un activo defensor de esta actitud. También debemos considerar como un activo participante en la dirección de las asociaciones empresarias a Euvaldo Lodi quien se convirtió en un férreo sostenedor del presidente y pedía a sus colegas industriales en 1945: trabajar por la victoria de su conservación en el gobierno, puesto que cualquier otro haría perder el terreno ya conquistado por la industria.²⁷ Lodi jugaba un doble papel en la canalización de las relaciones entre estado y asociaciones empresarias: además de líder empresarial e integrante de numerosas comisiones y consejos técnicos, organismos estatales y para-estatales, participaba directamente en emprendimientos económicos estatales.²⁸

La definición de un proyecto de desarrollo industrial

Normalmente las asociaciones de clase formulan programas de acción colectiva en los que los fines sectoriales se confunden con los generales. Sin embargo, para que se produzca una verdadera reorganización de la sociedad y de los principios que la rijan debe existir un proyecto que comprenda una posibilidad de realización efectiva para todos los sectores que la integran. El modelo del capitalismo industrial triunfante en todo el mundo ofrecía una posibilidad en ese sentido. El proyecto industrialista coincidía con los intereses de toda la Nación.

La imagen pública del industrial poco ayudaba a esta misión, indispensable para establecer relaciones positivas con los restantes grupos sociales: los *manufatores* cargaban con la acusación de *tubarão*, *barão salteador*, rapaces, insensibles, ambiciosos. Hasta bien entrada la década del '30 no eran capaces de imponer a los canales de comunicación una visión más favorable de sus actividades, en gran medida por la alta proporción de extranjeros que había en sus filas, especial-

27. Citado por Hilton, 1977, p. 123.

28. Lodi participaría de la Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, proveyendo de carbón desde Criciúma *Boletim Conselho Federal de Comércio Exterior*, III, nº 27, nov. 1943, p. 21.

mente en San Pablo.²⁹ Esta imagen del industrial se hallaba asociada también a un tipo de accionar público caracterizado por la demanda permanente de protección aduanera que elevaba los precios relativos de los productos importados.

Sin embargo, la dirigencia empresarial fue gestando un proyecto que se elevaba notablemente sobre este modelo. Este proyecto fue concebido desde San Pablo en donde comenzaría a surgir una serie de instituciones que impulsaban la modernización capitalista centrada en la industria y que serían por su parte centros de elaboración de ideas, de educación para la elite social y de difusión de una cultura industrial. Estas instituciones eran el *Instituto de Organização Racional do Trabalho* (IDORT), creado en 1931 por acción de la Asociación Comercial orientado a la difusión de una cultura basada en la eficiencia técnica y administrativa, inspirada más o menos directamente en la filosofía de Frederic W. Taylor y la *Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo*, que fuera fundada por Simonsen y otros dirigentes en 1933 destinada a ampliar la formación superior de la elite hasta entonces limitada a medicina y derecho.

Pero, para la conformación de un proyecto con suficiente recepción en la sociedad se requería la existencia de un fuerte liderazgo sectorial y personal. La construcción de un líder llevaría unos años y se concretaba primero a través de Roberto Simonsen, cuya carrera estaba identificada en la oposición a Vargas y en la lucha contra el poder personal del caudillo riograndense. A este liderazgo de Simonsen en San Pablo le acompañaba, cooperativamente, el de Euvaldo Lodi en el escenario nacional.

Una de las características de esta propuesta del sector industrial, particularmente el paulista, consistía en buscar el apoyo de otros sectores de las clases dominantes, que se concretaría particularmente a través de una alianza duradera entre la industria y el comercio.

A finales de la guerra las cuestiones del desarrollo económico, tomando a la industria como eje, pasaban a ser discutidas en el I Congreso Brasileño de la Economía que se reunía entre el 8 y el 18 de diciembre de 1944, convocado por la Confederación Nacional de la Industria. A través de este acto, que revestía un carácter de manifiesto a la nación y no de un acto de organización interna, se ideaba un gesto que mostraba al empresariado industrial a la vanguardia del cambio económico y tecnológico.

En primer lugar, se dio un enfático pronunciamiento a favor de la planificación y que se destinaba a fortalecer la posición de Simonsen en su enfrentamiento con Gudin, en lo que se ha llamado la Controversia sobre el Planeamiento. Dentro de esta posición se propiciaba una integración vertical de la economía nacional por medio del desarrollo de las industrias de base – siderurgia, minería del carbón del hierro, celulosa, cemento y destilación de petróleo – generadoras de insumos fundamentales para el sector industrial.³⁰

29. Pereira, 1974, p. 23.

30. Confederação Nacional da Indústria, 1945, pp. 191–193.

Este pronunciamiento explícito del empresariado industrial fue complementado por una reunión del conjunto de las clases propietarias en Teresópolis (RJ) en la *Conferência das Classes Produtoras* de Brasil, de mayo de 1945. En este encuentro, la burguesía industrial supo hacer valer su posición de liderazgo a través de una declaración en que la industrialización del país pasaba a ser un objetivo nacional prioritario.³¹

Como se ve este pronunciamiento no sólo dejaba de lado los antiguos cuestionamientos a los inconvenientes supuestos por la industria, sino también la distinción entre las industrias naturales y las industrias artificiales. Ahora la diferenciación debía ser entre las industrias estratégicas y no estratégicas, distinción que prescribía un tipo de comportamiento estatal ya que para la primera correspondía una acción estatal de fiscalización, auxilio y creación cuando la iniciativa privada se omitiera.

El empresario en la “democracia populista” (1946–1954)

Los últimos meses del Estado Novo no fueron fáciles para el sector empresarial especialmente para líderes como Simonsen y Lodi, tan identificados con el régimen en que participaban a través de los cuerpos que integraban. De ahí que los sectores anti-getulistas los atacaron tanto por ser los soportes sociales del régimen como sus beneficiarios. Las instituciones reguladoras implementadas desde 1930 para hacer frente a la emergencia de la crisis y que fueron apoyadas por los sectores productivos pasaron a ser consideradas aliadas del gobierno dictatorial. Los institutos como el Departamento Nacional do Café, el Instituto del Azúcar y el Alcohol, el de la Sal, el del Cacao fueron acusados por ejemplo en la Asamblea Constituyente por Arthur Bernardes, ex presidente de la Nación, de “atar al carro de la Dictadura a clases antes consideradas independientes”.³² Estos embates también tenían por destinatarios principales aunque no únicos a la dirigencia empresarial en su conjunto.

A pesar de esto, la consolidación de la capacidad operativa de las asociaciones empresariales junto con el desarrollo industrial precedente en el período estado-novista, preparó al sector industrial para afrontar con solidez la nueva coyuntura política inaugurada con la caída de la Dictadura y el ingreso a una etapa democrática, la llamada Democracia Populista (1946–1964). Parecía llegada la hora de disminuir la protección que había recibido la industria hasta ese momento. Estas opiniones eran incluso expresadas por sectores económicos que habían sido aliados de los industriales como el de los comerciantes.

31. Conferência das Classes Produtoras do Brasil, 1945, pp. 6–7.

32. *Revista de comercio*, abril 1946, *apud* Draibe, 1985, p. 281.

La lucha por dirigir en uno o en otro sentido la política económica ocurría en un tiempo de mudanza institucional dominada por la contradicción entre la democratización del estado y la continuidad objetiva de aspectos substanciales de un Estado Novo centralizador y corporativizante. La persistencia de instrumentos de centralización estatal y de integración corporativa de actores económicos fueron obstáculos casi insalvables para conformar un sistema político democrático —en un sentido liberal— y representativo, esto es fundado en partidos políticos, eficaz. La continuidad de las tradiciones corporativas permitió al empresariado mantener una fuerte presencia sobre el escenario nacional a pesar del discurso anti-autoritario y anticorporativo que predominara al final de la Segunda Guerra Mundial. Aunque el gobierno Dutra proclamaba que se proponía disminuir en alguna medida la influencia de los empresarios en el gobierno, hubo de nombrar para el Ministerio de Trabajo a Morvan Dias de Figueiredo, un notorio dirigente de la FIESP, pero ligado a la pequeña y mediana empresa. La continuidad entre Estado Novo y la democracia populista quedaba reflejada en el perfeccionamiento del proyecto desarrollista en el que confluían empresarios, burócratas y políticos y que adquirió su legalización formal en la Asamblea Constituyente de 1946.

En esta asamblea se produjo un arduo debate entre las diversas líneas de propuestas de política económica. La ortodoxia, el desarrollismo nacionalista, el desarrollismo no nacionalista y el socialismo confrontaron a través de bancadas de diputados, que por primera vez se hacía oír después de casi de una década de parlamentos cerrados. El desarrollismo no nacionalista, finalmente triunfante en las discusiones de esa asamblea, fue precisamente el fruto ideológico de la alianza entre la burocracia estatal y la burguesía industrial para imponer un sistema que les permitiera operar conjuntamente a través de la dirección política del aparato del estado en la implementación de la política económica y en la forma en que eran adoptadas las resoluciones.

A pesar de todo y movido en parte por las condiciones internacionales, el gobierno Dutra buscaría en este contexto modificar la proximidad que el estado había tenido con los empresarios e impulsaba en sus primeros años una política económica favorable al libre comercio. El empresariado continuaba y renovaba en este contexto su modo de actuar en la escena pública por medio de instrumentos ya conocidos como la alianza con el comercio y las fuerzas armadas, la colaboración corporativa con el estado, la formación de grupos técnicos asesores, a los que le agregaba una utilización de los partidos políticos y el Congreso. La utilización de dichos instrumentos le permitía tener una cuota de influencia ante importantes organismos del estado como eran la Cartera de Crédito Exportador e Importador (CEXIM), el Departamento de Crédito del Banco del Brasil, la Superintendencia de Moneda y Crédito (SUMOC) y a través de ellos sobre el Ministerio de Asuntos Extranjeros y el Tesoro.

Con la vuelta de Vargas al gobierno en 1951, se mantuvo el peso político de los líderes empresariales. Vargas estuvo rodeado en esta etapa de su paso por el poder por un grupo de activos dirigentes empresarios entre los que estaban Lodi y Horácio Lafer y que mostraban que el viejo líder seguía considerando esta alianza

como un aspecto central de la política nacional. Sin embargo, esta etapa fue también la que marcaría el ascenso del *trabalhismo*, como forma política y que sería responsable por el populismo con que es descripto este período.

La década de 1950 introdujo a este sistema de hegemonía política de los empresarios algunas correcciones de significación. Los cambios en la economía mundial llevaron a una reorientación de la economía, con la apertura al capital extranjero que condujo a la reestructuración del sector industrial. El proceso de diversificación subsiguiente condujo a una cierta conflictividad entre sectores tradicionales, más vinculados a las empresas de capital nacional y sectores modernos en conexión con las empresas multinacionales. En efecto, la presencia de estas empresas condujo a una reorganización fáctica de las asociaciones empresarias. Esto fue creando conflictos al interior de las asociaciones industriales, en especial la Confederación Nacional de la Industria, un dirigente como Lodi, capaz de representar a la totalidad de la industria. Así como el suicidio de Vargas vino señalar el final del desarrollo industrial asociado, la salida de Lodi de la CNI simbolizaba la nueva situación de fraccionamiento y división que evidenciaba el sector empresarial ante el fortalecimiento del segmento de empresarios ligados al capital extranjero.

Conclusiones

La actuación pública del empresariado de ambos países —en principio— estaba dirigida a ampliar el lugar de la industria en la economía nacional. A partir de la Gran Depresión, con la presencia creciente del estado en la economía las cuestiones políticas pasaron a ser decisivas en la determinación de la rentabilidad empresarial. Más aún, la intervención estatal en la economía fue concebida y aceptada en la medida en que participaran en su gestión los sectores propietarios. La capacidad de interferir y de influir en la dirección de la intervención económica estatal por parte del empresariado ha estado en relación directa con su capacidad organizativa, la existencia de liderazgos aglutinantes, la formulación de un proyecto industrial coherente y aceptable para los demás actores sociales y la posibilidad de participar en decisiones del estado.

Uno de las dificultades visibles en la Argentina resultaba el hecho de que el empresariado no llegó a constituir un sistema de representación de los intereses industriales lo suficientemente fuerte y de perfil nitidamente industrial. Además tampoco existieron formas de canalización de demandas que en Brasil estuvieron constituidos por los que hemos llamado consejos técnicos.

Tanto bajo la democracia constitucional y la república conservadora restringida como en la dictadura militar y el peronismo, los empresarios argentinos carecieron de medios *orgánicos* de influir sobre la formulación política. Esta dificultad de participación en las decisiones políticas ya se advertía en la llamada Década Infame cuando el sector empresarial se volcó decididamente a la vida política sin en-

contrar en ella un lugar, quedando sometido a los vaivenes políticos sin poder de adaptación ni de usufructo de las cambiantes circunstancias. Perón y el peronismo acabaron representando un tipo de política económica que implicaba la ampliación de las funciones estatales en la economía, el proteccionismo y las políticas favorables a la distribución del ingreso. Lejos de ser accidental, el peronismo reflejaba la fortaleza potencial del movimiento obrero y la imposibilidad del empresario de enfrentar esa fortaleza con un proyecto de alcance e interés nacional. Triunfador en el corto plazo en su tentativa de conformar un movimiento político de sólido arraigo electoral, Perón fracasó en la tentativa de forjar un estado verdaderamente arbitral de los conflictos sociales y palanca del impulso económico.

En Brasil, la situación se presentaría bastante diferente por la particular interacción allí visible entre política y economía. La industria contaba con un mercado interno geográficamente más vasto, e incomunicado, y con un bajo ingreso nacional que si abarataba sus costos, limitaba también las posibilidades de crecimiento. Acotado el peso de la sociedad civil por la marginación de la ciudadanía de grandes franjas de la población, el sector patronal contaba con el beneficio de un acceso más directo y privilegiado al poder político que el sector laboral. La Gran Depresión se presentaría como una oportunidad de expansión industrial a expensas de un sistema monoexportador, evidentemente agotado, al que había que reemplazar. La caída de la *República Velha* y su reemplazo por un estado varguista multiforme, abriría las puertas de una mayor colaboración y penetración empresarial en la política pública. La confluencia del derrumbe del sistema oligárquico de la República Velha y el colapso del sistema monoexportador facilitaba entonces la aceptación de la industria como una de las bases de la economía nacional y al mismo tiempo abría el camino para que los industriales pudieran actuar en el *making policy* a través de las relaciones estrechas con el gobierno y los órganos que intermediaban intereses. Aunque una causalidad lineal entre Revolución de 1930 y desarrollo industrial resulte hoy difícilmente aceptable, entre estos dos órdenes de fenómenos existía cuanto menos una interacción que produjo cambios recíprocos. De ésta surgió una ideología nacional-desarrollista que contó como primer soporte y como principal aliado al sector empresarial. Éste se apoyó además en la herencia institucional de Vargas que, aunque no constituyó como Perón un movimiento político monolítico de peso electoral, fue capaz de estructurar un aparato estatal centralizado y con mayor capacidad de implementar políticas de desarrollo.

RESUMEN

A través de este trabajo hemos tratado de mostrar las diversidades que caracterizaron a las burguesías de Argentina y Brasil en la etapa de la afirmación de las economías industriales en ambos países, analizando el denso entramado tejido entre el poder económico y el poder político.

Vemos que en el caso brasileño, las clases propietarias tejieron con el estado un modelo de asociación que terminó de definirse en la década de 1930 a través de la conformación de un fuerte sesgo corporativista en la relación entre ambos sectores. Al mismo tiempo se fue perfilando en aquella época un proyecto netamente industrialista que impulsado por el empresariado industrial y por la burocracia, llevó a una aceptación generalizada del desarrollo industrial como parte imprescindible de la afirmación de la nación brasileña.

La Argentina, por el contrario, tuvo un curso señalado por el éxito de su vocación exportadora y por la mayor independencia de las clases respecto al poder político. Esta independencia se tradujo en una mayor vocación por el liberalismo económico y por el pluralismo de las organizaciones gremiales. Desde nuestro punto de vista, la debilidad organizacional del sector industrial, junto con sus dificultades en la economía de mercado, contribuyeron a una menor capacidad para encabezar un proyecto de desarrollo industrial.

ABSTRACT

In this study we have attempted to show the difference between the Argentine and Brazilian bourgeoisie in the stage when the two countries were establishing their industrial economies by analyzing the tightly woven fabric of economic and political power.

We see that in the case of Brazil, the property owning classes, together with the State, wove a model of association which was finally defined in the 1930's through the establishment of a strongly corporative bias in the relationship between the two sectors. At the same time, in that period a clearly industrialist project was taking shape which, encouraged by industrial entrepreneurs and the bureaucracy, led to widespread acceptance of industrial development as an essential part of the consolidation of the Brazilian nation

Argentina, on the other hand, followed a course marked by the success of her export capacity and by the greater independence of the classes from the political power. This independence was translated into a greater inclination towards economic liberalism and for pluralism among the trades union organizations. From our point of view, the industrial sector's organizational weakness, along with its difficulties in the market economy, have contributed to a weaker capacity to lead an industrial development project.

Bibliografía

- Birle Peter, *Los empresarios y la democracia en la Argentina*, Buenos Aires, Editorial de Belgrano, 1997.
- Camargo Aspasia et al, *O golpe silencioso*, Rio de Janeiro, Rio Fundo Ed., 1989.
- Carone Edgar, *O Centro Industrial do Rio de Janeiro e a sua importante participação na economia nacional (1827-1977)*, Rio de Janeiro, Cátedra, 1978.
- Centro Industrial do Brasil, *Relatório da Diretoria. 1928-1931*, Rio de Janeiro, 1931.
- Cornblit Oscar, "Inmigrantes y empresarios en la política argentina" en Torcuato Di Tella y Tulio Halperín Donghi (Comp.) *Los fragmentos del poder*, Buenos Aires, Jorge Alvarez, 1969.
- Costa Vanda Ribeiro, *A experiencia corporativa em São Paulo*, Rio de Janeiro, FGV-CPDOC, 1989.
- Cúneo Dardo, *Comportamiento y crisis de la clase empresaria*, Buenos Aires, Pleamar, 1967.
- Dean Warren, *A industrialização de São Paulo*, São Paulo, DIFEL, 1971.
- Fausto Boris, *A Revolução de 1930*, São Paulo, Editora Brasiliense, 13ª edición, (1ª edición, 1970), 1994.
- Gasparian Marcos, *O Industrial*, São Paulo, Martins, 1973.
- Hilton Stanley, "Vargas e o desenvolvimento econômico brasileiro, 1930-1945: uma reavaliação de uma posição sobre a industrialização e o planejamento" en S. Hilton (org.) *O Brasil e a crise internacional: 1930-1945*, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1977.
- Jáuregui Aníbal, "Los industriales ante el surgimiento del peronismo", *Cuadernos de Historia Regional*, Universidad Nacional de Luján, n° 20-21, 1999.
- Jáuregui Aníbal, "La regulación económica y la representación corporativa en Argentina y Brasil" *Revista de Sociologia e Política*, Universidade Federal de Paraná (Brasil), n° 14, junio, 2000.
- Leopoldi Maria Antonieta, *Industrial Associations and Politics in Contemporary Brazil*, Tese Ph D., St. Antony's Collegue, 1984.
- Lindenboim Javier, "El empresariado industrial argentino y sus organizaciones gremiales entre 1930 y 1946" en *Desarrollo Económico*, n° 62, jul-sept., 1976.
- Mendonça Sonia Regina, "A consolidação da República oligárquica" en Maria Yedda Linhares (org.) *Historia Geral do Brasil*, Rio de Janeiro, Campus, 1990.
- Miceli Paulo Celso, *Alem da fabrica: o projeto industrialista em São Paulo, 1928-1948*, São Paulo, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, 1992.
- Mueller Charles, *Das oligarquias agrárias ao predomínio urbano-industrial: um estudo de processo de formação das políticas agrícolas no Brasil*, Rio de Janeiro, IPEA/INPES, 1983.
- Pereira Luis Carlos Bresser, "Origens étnicas do empresariado paulista" en *Revista de Administração de Empresas*, junio, 1974.

